



DICIEMBRE DE 2025

informe contraste

ANÁLISIS
ESTRATÉGICO DE
COYUNTURA
MENSUAL

Análisis de coyuntura política nacional, economía, seguridad e internacional.

CATALINA VALDÉS, TOMÁS ARIAS, DANIEL GRIMALDI¹

Resumen ejecutivo

Noviembre 2025 estuvo marcado por un paso importante hacia un reordenamiento profundo del panorama político chileno e internacional. En Chile, Jeannette Jara ganó la primera vuelta de la elección presidencial y la izquierda obtuvo la bancada más numerosa en la Cámara, mientras la derecha radical creció y el PDG se consolidó como “actor bisagra”. El Presupuesto 2026 reveló tensiones preelectorales, pero finalmente fue aprobado dentro de los márgenes de responsabilidad fiscal. En economía, se observan señales mixtas. Crecimiento estable, baja del desempleo y alza salarial, pero un PIB débil y presiones por el alza de los costos de producción. En seguridad, disminuyeron los delitos violentos y contra la propiedad, aunque aumentaron los delitos asociados a drogas; además, se implementó una nueva ley de seguridad privada y surgieron alertas por violencia en colegios y un inquietante caso de corrupción política (“trama bielorrusa”).

A nivel internacional, la escalada del conflicto entre EE. UU. y Venezuela tensiona la estabilidad regional, la militarización peruana impacta la frontera norte chilena, Argentina enfrenta incertidumbre financiera y Brasil vive un hito institucional con la prisión de Jair Bolsonaro. En conjunto, estos procesos demandan que Chile combine prudencia fiscal, un extremo cuidado en la gobernabilidad democrática y una política exterior orientada a la cooperación regional y la distensión de los conflictos.

¹ Catalina Valdés, Cientista Política de la Universidad de Chile, investigadora de Chile 21; Tomás Arias, Cientista Político de la Universidad Diego Portales, investigador de Chile 21; Daniel Grimaldi, Doctor en Estudios Políticos École des Hautes Études en Sciences Sociales, director ejecutivo de Chile 21.

Executive Summary

November 2025 was marked by an important step toward a profound reordering of the Chilean and international political landscape. In Chile, Jeannette Jara won the first round of the presidential election, and the left secured the largest caucus in the Chamber of Deputies, while the radical right grew and the PDG consolidated itself as a “hinge actor.” The 2026 Budget revealed pre-electoral tensions but was ultimately approved within the bounds of fiscal responsibility.

In the economy, mixed signals are evident: stable growth, declining unemployment, and rising wages, but weak GDP performance and pressure from increasing production costs. In security, violent and property crimes decreased, although drug-related offenses increased; in addition, a new private security law was implemented, and alarms were raised over violence in schools and a troubling case of political corruption (the “Belarusian scheme”).

At the international level, the escalation of the conflict between the U.S. and Venezuela is straining regional stability, Peru’s militarization is affecting Chile’s northern border, Argentina faces financial uncertainty, and Brazil is experiencing an institutional milestone with the imprisonment of Jair Bolsonaro. Taken together, these developments require Chile to combine fiscal prudence, extreme care in democratic governance, and a foreign policy oriented toward regional cooperation and the de-escalation of conflicts.

1. Política nacional

- La candidata de la izquierda Jeannette Jara Román triunfa en la primera vuelta de la elección presidencial, superando por más de 300 mil votos a José A. Kast. En las elecciones de diputados, la derecha radical creció, pero el oficialismo conformó la coalición electoral más votada del país. El PDG recupera influencia reflejado en el tercer lugar del candidato Franco Parisi y sus 14 diputados. La derecha logra empatar en el Senado, logrando un equilibrio entre izquierda y derecha en la cámara alta².
- Jeannette Jara configura su estrategia electoral de cara a la segunda vuelta, presentando un nuevo equipo y apostando por participar en más debates y plataformas virtuales. En tanto, Kast apuesta por acudir menos a debates y programas televisados, levantando críticas sobre el ocultamiento de sus posturas más radicales que podrían perjudicar su candidatura. Además, los votantes de Jara lograron articular una histórica red de voluntarios para apoyar la candidatura de izquierda de Arica a Punta Arenas, con más de 20 mil voluntarios. Jara suma el apoyo de la ANEF, la CUT y diversas organizaciones universitarias. Debate presidencial ARCHI favorece a Jara³. Por su parte, JAK recibió el apoyo de todas las fuerzas de derecha y centro derecha, incluidos Evópoli, Demócratas y Amarillos, partidos en disolución por no alcanzar el umbral mínimo en la elección parlamentaria.
- Si bien la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó la acusación constitucional contra Diego Pardow, el Senado la rechazó. Los senadores coincidieron en que no existió una infracción a la Constitución ni a la ley. Los errores en el cálculo de las tarifas eléctricas fueron cometidos por organismos técnicos autónomos (la Comisión Nacional de Energía y el Coordinador Eléctrico Nacional), y no era posible atribuir responsabilidad constitucional directa al ministro por decisiones que no le competen legalmente⁴.

Análisis

Los resultados electorales de la elección presidencial y legislativa del 16 de noviembre constituyen el hecho más trascendental en política nacional del año. La candidata de la izquierda Jeannette Jara ganó la primera vuelta presidencial con casi el 27% de los votos. En tanto, el derechista radical José A. Kast sacó el segundo lugar con cerca del 24% de los votos, seguido por Franco Parisi (20%), Johannes Kaiser (14%), Evelyn Matthei (12%), Harold Mayne-Nicholls (1%), Marco Enríquez-Ominami (1%) y Eduardo Artés (cerca del 1%). Los resultados electorales causaron tanto entusiasmo como decepciones en el mundo político. El quinto lugar alcanzado

² [El Siglo](#), 17 de noviembre de 2025. [Emol](#), 17 de noviembre de 2025. [Diario Uchile](#), 25 de noviembre de 2025.

³ [La Tercera](#), 24 de noviembre de 2025. [El Mostrador](#), 27 de noviembre de 2025. [Interferencia](#), 26 de noviembre de 2025. [Emol](#), 21 de noviembre de 2025. [El Desconcierto](#), 3 de diciembre de 2025. [El Ciudadano](#), 23 de noviembre de 2025. [El Siglo](#), 16 de agosto de 2025. [The Clinic](#), 4 de diciembre de 2025. [El Desconcierto](#), 4 de diciembre de 2025.

⁴ [T13](#), 19 de noviembre de 2025. [La Tercera](#), 25 de noviembre de 2025.

por Evelyn Matthei refleja la pérdida de popularidad de la derecha tradicional, representada por la UDI, RN y Evópoli -más el respaldo de Demócratas y Amarillos. El Piñerismo y su legado político quedan en gran entredicho con este resultado más favorable a la derecha radical y pinochetista.

Si bien estos partidos de centro derecha lideraron el voto conservador desde el retorno a la democracia -compitiendo con posibilidades reales de alcanzar la presidencia desde 1999- los nuevos votantes de derecha se han decantado por candidatos más autoritarios. Si algo clave diferencia a la derecha tradicional de la derecha radical, es su capacidad de diálogo, debido a más de 30 años de procesos de negociación con el progresismo. Esto se vio reflejado en sus posturas más dialogantes durante el último gobierno de Boric, a diferencia de la derecha radical, que como estrategia de diferenciación se ha opuesto esencialmente a todo. Este comportamiento constituye un serio precedente sobre su capacidad de conducir reformas en un contexto de fragmentación política como el que hoy existe en Chile.

Jeannette Jara goza de alta popularidad entre los sectores populares, reflejado en su alta votación en comunas como San Joaquín (39%), Pedro Aguirre Cerda (42%) y Lo Espejo (37%), teniendo oportunidades de ser una candidata competitiva de cara a esta segunda vuelta. Es relevante destacar el hecho que por primera vez en la historia de Chile una candidatura de origen social popular, reúne a todo el progresismo tras de sí y compite seriamente por la primera magistratura. Sin embargo, su desafío es grande, ya que todos los candidatos de derecha sumaron más del 50% y necesitaría ir por votantes de Matthei más una amplia mayoría de los votantes de Parisi (más del 70% según Unholster) y otro tanto de blancos y nulos; una tarea titánica. Con todo, no es la primera vez que esto sucede. En la elección presidencial de 2005 y 2021 la derecha también sumaba la cantidad necesaria para alcanzar la presidencia y aun así la izquierda llegó a La Moneda. Los candidatos no son dueños de los votos de sus electores y pueden darse cambios sorpresivos la última semana de campaña.

El programa de Jara es sólido en materia técnica y con metas realistas que dan confianza en que su administración seguiría la tendencia de los gobiernos progresistas anteriores hacia mantener la estabilidad macroeconómica y las reglas del mercado. Con una salvedad, por el contexto actual de predominancia de la agenda de seguridad y de disciplina fiscal, probablemente sería un tanto más moderado que el actual gobierno, pero con mucha mayor capacidad de implementar políticas. La agenda social predominaría frente a agendas valóricas más nuevas, junto con un nuevo impulso económico en materia de política industrial.

Si bien José A. Kast es el favorito -no por su score de primera vuelta sino por la fuerza del conjunto de las candidaturas de la derecha- tampoco tiene el terreno llano. Su fortaleza está en condición de oposición férrea al gobierno de turno y su acento militarizado en materia de seguridad con un discurso de mano dura y anti-migración. Sin embargo, su capacidad de gobernar deja muchas dudas en cuanto a su poca o nula disposición al diálogo con fuerzas opuestas y, por otra parte, dado al carácter de “emergencia” del sello de su gobierno. En efecto, un gobierno de emergencia se contradice con la planificación y objetivos de mediano y largo plazo que es lo que el país necesita para salir de la “trampa del ingreso medio”. Su agenda

económica es un clásico de la derecha en cuanto a la disminución de impuestos para incentivar la economía, pero tal medida es insuficiente para proyectar el país. Asimismo, los recortes prometidos de 6 mil millones de dólares - 2% del PIB nacional-, amenazan con desestabilizar la economía más que incentivar, sobre todo porque es técnicamente irrealizable, al igual que su promesa de expulsión de los 300 mil inmigrantes ilegales.

Con todo, sus capacidades de gobierno podrían mejorar bastante con el apoyo de los equipos de Chile Vamos, que tienen mayor expertise y generan mayor confianza, sin embargo, por la disputa por la hegemonía que existe en el sector, no es seguro que el apoyo sea duradero. Si Kast gira al centro, perderá el apoyo de los nacional libertarios de Kaiser, la competencia interna más directa para la derecha republicana.

La gran sorpresa electoral fue el tercer lugar alcanzado por Franco Parisi, con casi el 20% de los votos. La irrupción de Parisi resultó sorpresiva dado que este candidato no marcaba muy bien en las encuestas de intención de voto, demostrando que estos instrumentos fallan para medir el panorama electoral y no logran representar a una considerable cantidad de chilenos, sobre todo a los votantes obligados y que no contestan encuestas. Seguramente, el discurso anti-élite, pro clase media y meritocrático de Franco Parisi logró capturar un voto de una importante masa de chilenos, sobre todo en la zona norte. Hay que considerar que el “fenómeno Parisi” se inscribe en un continuum de candidaturas “alternativas” desde el retorno a la democracia que no han querido alinearse con los sectores dominantes, el fenómeno anterior fue MEO, por ejemplo. El hecho que la dirección del PDG haya llamado a votar nulo o blanco después de una misteriosa consulta online, puede ayudar a mostrar la capacidad real que tienen de alinear a sus propios electores dependiendo del destino final de ese apreciado 20% en la segunda vuelta.

Tras el resultado electoral de primera vuelta, tanto José Kast como Jeannette Jara prepararon nuevas estrategias de campaña. Por un lado, Jeannette Jara reorganizó su comando incorporando a relevantes figuras de la centro izquierda como Carlos Ominami (PS) y a Francisco Vidal (PPD), mejorando su imagen para captar los votos de los antiguos votantes de la Concertación que temen a votar por una candidata del PC. Jara también tratará de intensificar su campaña en terreno para capturar el voto de los electores de Franco Parisi, Matthei y tratando de convencer a quienes votaron nulo o blanco. Esto quedó reflejado en los más de 20 mil voluntarios por Jara desplegados desde Arica a Punta Arenas, una cantidad histórica de ciudadanos que se movilizarán a favor de Jara y harán puerta a puerta para incrementar la popularidad de la candidata. A ello se suma el respaldo a la candidatura de Jara por parte de la sociedad civil organizada, como la Asociación de Empleados Fiscales, Ukamau, la Central Unitaria de Trabajadores y federaciones universitarias como las de la U. Valparaíso, U. de los Lagos, U. Alberto Hurtado y seguramente la USACH. De igual forma, se planeó intensificar su presencia en medios de comunicación de masas como podcast, canales de YouTube y debates televisados, buscando mejorar su visibilidad y demostrar sus capacidades argumentativas y técnicas. Con todo, no se observa una unidad de mando en su comando, no están claros los roles ni vocerías, sumado a los roces internos que se han conocido en la prensa.

Por otro lado, Kast apostó por no acudir a debates ni a medios de comunicación debido a su capacidad limitada para debatir y exponer sus ideas, lo cual le puede restar votación y perjudicar su candidatura. Kast apuesta por aparentar ser un candidato “en terreno”, realizando montajes donde aparentemente se ve cercano a la ciudadanía. No obstante, el debate ARCHI realizado el 3 de diciembre —con más de 4 millones de oyentes— reflejó la poca capacidad de José Kast para debatir y exponer sus convicciones, potenciando la candidatura de Jara, quien aprovechó la instancia de demostrar sus capacidades profesionales y emplazar a Kast por sus ideas insostenibles como la reducción del gasto público o indultar a delincuentes condenados por crímenes de lesa humanidad. La estrategia de Jara apunta a “sacar al pizarrón” al republicano, para que explique sus propuestas técnica y valóricamente más discutibles, mientras que la estrategia de Kast parece ser atrincherarse en las críticas al gobierno y no entrar en debates valóricos que lo puedan incomodar.

Respecto a las elecciones legislativas, no hubo una avalancha de la derecha como se pronosticaba. La izquierda tuvo un buen desempeño logrando ser la coalición más votada del país, el progresismo en la lista «Unidad por Chile» alcanzó 61 diputados, transformándose en el bloque más numeroso de la cámara. En tanto, la derecha radical obtuvo 42 diputados bajo la lista «Cambio por Chile» frente a los 34 diputados de la derecha tradicional representada por la coalición «Chile Grande y Unido». El Partido de la Gente obtuvo 14 diputados, reflejando el crecimiento de la figura de Parisi dentro del Congreso. También fue electo un diputado independiente, 1 militante de Acción Humanista y 2 de la Federación Regionalista Verde Social. A grandes rasgos, se puede observar que, pese a que el progresismo perdió 7 escaños respecto a la elección anterior, se logró cierto equilibrio legislativo, donde sea quien gane la presidencia, tendrá que negociar con una oposición fragmentada para impulsar sus propuestas más ambiciosas. En este aspecto, el PDG se transformó en un partido bisagra vital para aprobar proyectos de ley significativos. La jefa de la bancada del PDG la diputada Pamela Jiles, ya anunció su posición dura frente a quien gobierne, llegando a señalar que “le hará la vida imposible” a Kast si es electo. Asimismo, el equilibrio dentro del PDG también es una gran interrogante. Los 6 diputados que alcanzó en la elección pasada terminaron afiliados a otras bancadas y puede que estos nuevos 14 corran una suerte parecida, ya que, se han evidenciado grandes diferencias entre ellos y el partido no cuenta con un perfil valórico ideológico claro, sirviendo más bien como un trampolín para entrar al parlamento desde posiciones marginales.

Un cierto empate también quedó evidenciado en el Senado, donde la izquierda se quedó con 23 escaños, sumando a los 3 asientos del FREVS con los 20 de «Unidad por Chile». En tanto, la derecha tradicional logró 18 escaños y la derecha radical 6. Solo hay un senador independiente. Al igual que en la cámara baja, el equilibrio logrado en la cámara alta representará un desafío para el próximo gobierno de turno al necesitar negociar para concretar su agenda. Si ganara Kast, seguramente tendrá el respaldo de la derecha tradicional para concretar su agenda, pero la izquierda no cedería fácilmente.

En otras materias, el rechazo en el Senado de la acusación constitucional contra el exministro de energía Diego Pardow, refleja que existen instancias de moderación política frente a un panorama de polarización y trincheras ideológicas en favor del contexto electoral. Por un lado, la

Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la acusación constitucional en su contra para culpabilizar de los fallos en la gestión de las tarifas eléctricas, atribuyéndolos a negligencia ministerial y buscando capitalizar el descontento público por el alza de tarifas eléctricas. Pero, por otro lado, el Senado destacó la autonomía de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), reconociendo que los errores en los cálculos tarifarios no configuran una infracción constitucional al ministro. La decisión de salvar a Diego Pardow refleja el respeto por parte de los senadores de la separación de poderes en Chile.

2. Economía

- Se informó que la actividad económica creció un 3,2% en septiembre. Los salarios anotan un incremento constante, anotando un 5,9% acumulado en 12 meses, acompañado de una inflación del 0% en octubre. Empresas chilenas en el exterior registran máximos históricos de ventas, con un intercambio que supera los 163 mil millones de dólares entre enero y octubre de 2025. Subió la PGU a 250 mil pesos para mayores de 82 años. Empieza a regir el acuerdo entre Chile y Emiratos Árabes. El desempleo nacional baja ligeramente a 8,4%⁵.
- PIB apenas crece un 1,6%, marcando un desempeño por debajo de lo esperado por analistas. La deuda pública llega al 42,7% del PIB. Costos del transporte siguen al alza, acumulando un 4,6% en 2025⁶.
- La discusión del Presupuesto 2026 en el Congreso chileno se caracterizó por intensas tensiones entre el gobierno de Gabriel Boric y la oposición (Chile Vamos, Republicanos y Democráticos), marcada por un rechazo masivo en la Comisión Mixta: 29 de 33 partidas rechazadas inicialmente por falta de transparencia en cifras de déficit fiscal, reajustes del sector público y provisiones insuficientes, lo que generó un inédito "polvorín político" en medio del clima preelectoral del 16 de noviembre.⁷

⁵ [Diario Financiero, 3 de noviembre de 2025](#), [Biobío, 6 de noviembre de 2025](#), [Biobío, 10 de noviembre de 2025](#), [Biobío, 11 de noviembre de 2025](#), [Diario Financiero, 28 de noviembre de 2025](#).

⁶ [Diario Financiero, 18 de noviembre de 2025](#), [Biobío, 7 de noviembre de 2025](#), [Biobío 20 de noviembre de 2025](#).

⁷ [El Mostrador, 4 de noviembre de 2025](#), [Biobío, 29 de octubre de 2025](#), [Senado, 21 de noviembre de 2025](#), [La Tercera, 18 de noviembre de 2025](#), [La Tercera, 26 de noviembre de 2025](#).

Tabla 1
Comportamiento de indicadores económicos durante el mes de noviembre 2025

Variable	Observación
Crecimiento económico (septiembre)	3,20%
Incremento salarial (acumulado 12 meses)	5,90%
Inflación (octubre)	0%
Ventas empresas chilenas en el exterior (ene-oct 2025)	USD 163.000 millones (récord histórico)
Desempleo	Disminuye a 8,4%
PGU (adultos mayores 82+ años)	\$250.000
Crecimiento del PIB	1,6%
Deuda pública/PIB	42,70%
Costos de transporte (acumulado 2025)	4,60%

Fuente: Revisión de prensa varia.

Análisis

Los últimos indicadores revelan avances significativos, pero con persistentes desafíos a nivel macroeconómico. El crecimiento de la actividad económica en septiembre (3,2%) confirma un crecimiento sostenido, lo cual también se puede reflejar en la baja del desempleo al 8,4%, un aumento salarial acumulado del 5,9% en 12 meses y una inflación del 0% en octubre. Estos indicadores evidencian un mayor dinamismo en la economía chilena, mejorando el poder adquisitivo de los chilenos y aumentando los bienes y servicios disponibles para su consumo.

Por otro lado, también resulta alentador constatar cómo las empresas chilenas con ventas en el exterior registran ventas récord, superando los 163 mil millones de dólares entre enero y octubre de 2025. Este dinamismo exportador no solo fortalece la llegada de nuevas divisas al país, sino que valida una estrategia de inserción global inteligente y diversificada, complementada por el reciente acuerdo con Emiratos Árabes. Este acuerdo permitirá agilizar el intercambio comercial con el país árabe, sobre todo en las exportaciones agrícolas chilenas beneficiando la entrada de nuevas divisas. Paralelamente, el aumento de la PGU a 250 mil pesos para los mayores de 82 años representa un avance concreto en la protección a los sectores más vulnerables, demostrando que es posible mantener disciplina fiscal sin renunciar a la solidaridad intergeneracional. Estos logros no son fortuitos, sino que responden a una economía política capaz de formar un crecimiento económico que beneficie a grandes capas de la población sin perjudicar el dinamismo de sus mercados.

No obstante, algunas noticias económicas pueden resultar menos entusiastas. El crecimiento del PIB de apenas 1,6% continúa por debajo de nuestro potencial y de las expectativas de los analistas, reflejando obstáculos profundos a la inversión productiva. Los costos del transporte, con un alza acumulada del 4,6% en 2025, constituyen un factor de presión tanto para el bolsillo de los chilenos como para la competitividad empresarial, especialmente de las pymes que ya operan con márgenes reducidos. La deuda pública en 42,7% del PIB, aunque se mantiene en niveles manejables y muy por debajo de numerosas economías desarrolladas, exige mantener un riguroso compromiso con la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. Estos indicadores económicos reflejan los problemas estructurales a los cuales se enfrenta Chile, donde un crecimiento del PIB tan acotado dificulta el cumplimiento de las expectativas de las personas. En tanto, el incremento de los precios del transporte también disminuirá el margen monetario destinado al ocio y al consumo. Chile cuenta con un potencial de crecer a tasas más aceleradas, pero el actual contexto político electoral puede dificultar el interés de los inversionistas en favor de concretar nuevos proyectos económicos debido a la incertidumbre sobre el nuevo rumbo de economía política que tomará el Estado chileno. Seguramente, una vez se decida el color político del nuevo gobierno los inversionistas tendrán mayores claridades del rumbo que tomará la nación y el crecimiento económico muestre niveles más favorables y beneficiarán a la población en su conjunto.

El turbulento proceso de negociación del Presupuesto 2026 evidenció cómo los cálculos electorales pueden comprometer la gobernabilidad económica. El rechazo inicial de 29 de las 33 partidas por la oposición respondió más a una estrategia de desgaste preelectoral que a objeciones técnicas sustantivas, generando una innecesaria incertidumbre sobre la ejecución de políticas públicas esenciales. Las disputas se centraron en destinaciones clave como el Ministerio de Seguridad, INJUV, Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG), sitios de memoria (Fundación 1367, Salvador Allende, Pisagua y Estadio Nacional) y fondos para el Congreso, con la oposición acusando al Ejecutivo de diseñar un erario "ajustado" para complicar al próximo gobierno de derecha y exigiendo mesas técnicas para negociar. Tras negociaciones en Teatinos 120 post-elecciones, la Comisión Mixta resolvió discrepancias, reponiendo la mayoría de recursos excepto para la Fundación Salvador Allende y PAIG, permitiendo que el Senado y la Cámara lo despachan a ley el 26-27 de noviembre con un alza de gasto del 1,7% alineada a la meta fiscal. Finalmente, el Congreso aprobó la Ley de Presupuesto 2026 sin modificar sus proyecciones centrales de ingresos y gasto, a pesar de las críticas de la oposición que la consideraba desfinanciada. El gobierno impuso su visión manteniendo el aumento del gasto en 1.7%

Si bien el acuerdo final permitió aprobar el presupuesto con un aumento del gasto del 1,7% —coherente con la regla fiscal y la responsabilidad macroeconómica—, el recorte selectivo a programas como el PAIG y la Fundación Salvador Allende revela cómo la oposición utiliza el instrumento presupuestario para perjudicar proyectos acordes ideológicamente a la izquierda, sacrificando políticas de inclusión y memoria histórica en aras de negociaciones políticas cortoplacistas.

Considerando que en un inicio la oposición rechazó gran parte de las partidas, esto se debe al clima electoral imperante en un inicio, donde las expectativas de lograr buenos resultados en las urnas primaron por sobre el debate técnico. La aprobación del gasto en los últimos días responde a la calma tras conocerse los resultados electorales, recuperando el análisis racional por sobre lo pasional. Cabe recordar que este constituye el último presupuesto nacional elaborado por el gobierno de Gabriel Boric, quien le dejará los recursos ejecutables para el próximo gobierno entrante. Este presupuesto también puede limitar o posibilitar las expectativas de políticas públicas de quien entre a La Moneda el próximo año, considerando que los dos candidatos predominantes en segunda vuelta prometen direcciones distintas en materia de gasto público. Mientras que Jeannette Jara promete profundizar un Estado de bienestar en Chile con políticas sociales, José Kast promete recortar el gasto público para optimizar el aparato estatal. De momento, el presupuesto aprobado se enmarca mejor en los planes de Jeannette Jara al contemplar un incremento del gasto público, mientras que Kast no podría presentar importantes avances en recortar recursos sino hasta el 2027. En caso de que el candidato de derecha radical llegue a ganar, su programa político económico tendría dificultades de ser aplicado en su primer año, teniendo Jeannette Jara un presupuesto más acorde a sus convicciones.

3. Seguridad

- **Violencia en colegios emblemáticos⁸:** La violencia escolar volvió a encender las alarmas en el Instituto Nacional: según la dirección del liceo, un grupo de encapuchados irrumpió en el establecimiento lanzando bombas molotov y rociando a tres profesoras con bencina, lo que obligó a suspender las clases de la mañana. Ante estos graves hechos, la Contraloría General ofició a la Municipalidad de Santiago y a la Superintendencia de Educación requiriendo que expliquen “todas las medidas que se han adoptado para evitar la reiteración de situaciones de violencia” en ese y otros colegios emblemáticos. Esta acción responde a la preocupación de las autoridades por la presencia de grupos organizados antisistema dentro de recintos educativos de alto perfil, una problemática que consideran coordinada desde fuera del aula.
- **Implementación de nueva ley de seguridad privada⁹:** La Ley 21.659, vigente desde fines de noviembre de 2025, redefine integralmente el marco de la seguridad privada en Chile. Establece a la Subsecretaría de Prevención del Delito como órgano rector encargado de autorizar a las empresas y a los vigilantes privados, elevando de manera significativa los estándares de formación, control y supervisión. Entre los cambios más visibles destaca la obligatoriedad del uso de cámaras corporales para los vigilantes armados con dispositivos no letales en servicios de alto riesgo, con el objetivo de asegurar un registro audiovisual de sus intervenciones. A su vez, la ley otorga a la Subsecretaría la facultad de determinar el nivel de riesgo de los recintos que cuenten con seguridad

⁸ [Cooperativa, 28 de noviembre del 2025](#); [Emol, 29 de noviembre del 2025](#).

⁹ [T13, 20 de noviembre del 2025](#); [ADN, 20 de noviembre del 2025](#).

privada y definir las medidas de protección aplicables mediante una matriz de factores de riesgo.

Su implementación ha generado ciertas tensiones entre las empresas del sector y el Ministerio de Seguridad, especialmente por los plazos acotados para su puesta en marcha y por las nuevas exigencias en materia formativa. Un aspecto que ha suscitado dudas es el futuro de quienes actualmente cumplen funciones de vigilancia y que, aun contando con las certificaciones vigentes, podrían no ajustarse completamente a los nuevos estándares educacionales. La normativa no detalla aún el mecanismo de transición para estos trabajadores, lo que ha instalado interrogantes sobre cómo se gestionará su regularización dentro del nuevo marco regulatorio.

- **Disminución de casos policiales por delitos de alta connotación pública¹⁰:** El Ministerio de Seguridad informó en noviembre de 2025 una disminución significativa en la mayoría de los delitos de alta connotación pública en el periodo enero–septiembre, en comparación con 2024. Los robos violentos totales cayeron un 8%, impulsados por descensos de 12,4% en los robos con violencia o intimidación y de 11,3% en los robos vehiculares (portonazos y encerronas). Estas cifras consolidan una tendencia sostenida a la baja tanto en los delitos contra las personas como en aquellos contra la propiedad.

Otros delitos de este grupo —incluyendo agresiones, homicidios dolosos y violencia intrafamiliar— también mostraron reducciones en el mismo periodo, reforzando una mejora general en los indicadores de seguridad pública. Sin embargo, esta evolución positiva presenta una excepción importante: los delitos asociados a drogas. El reporte oficial indica que este es el único grupo delictivo que aumentó, registrando un crecimiento promedio de 13,3%. En particular, el microtráfico subió 16,4% y el consumo de drogas en la vía pública aumentó 13,3%.

Este incremento en los delitos de drogas introduce matices relevantes al análisis global: señala una presión creciente vinculada al narcotráfico y al control territorial, elementos que pueden tensionar la capacidad institucional pese a la reducción registrada en otras áreas delictivas.

- **Trama bielorrusa¹¹:** Noviembre trajo nuevos antecedentes sobre la denominada “trama bielorrusa”, un caso de presunta corrupción política que continúa ampliándose. Interceptaciones del OS-7 de Carabineros revelaron que el conservador Sergio Yáber habría entregado \$1,7 millones al diputado republicano Cristián Araya en octubre de 2025. Si bien el pago fue presentado como un aporte de campaña, las conversaciones registradas indican que su objetivo real habría sido influir para frenar una acusación constitucional contra el exjuez Antonio Ulloa, uno de los actores investigados en el caso. En esas mismas interceptaciones surgieron además referencias a maniobras destinadas a perjudicar a otros legisladores opositores, sugiriendo la existencia de un entramado de presión política y tráfico de influencias.

Ante estos antecedentes, el Fiscal Nacional Ángel Valencia decidió trasladar una parte de las indagatorias a la Fiscalía Regional de Los Lagos, designando a la fiscal regional

¹⁰ [La Tercera, 26 de noviembre del 2025.](#)

¹¹ [Biobio Chile, 19 de noviembre del 2025;](#) [La Tercera, 25 de noviembre del 2025.](#)

Carmen Gloria Wittwer para encabezar la investigación relativa a las transferencias realizadas por Yáber a parlamentarios como Matías Walker y Cristián Araya. La fiscalía deberá profundizar en los movimientos financieros y en las posibles responsabilidades penales vinculadas a estos pagos, lo que abre una nueva arista centrada en eventuales delitos de cohecho e influencia indebida.

Mientras la investigación judicial avanza en el sur, las repercusiones políticas continúan. El diputado Araya —figura cercana al Partido Republicano y al candidato presidencial José Antonio Kast— enfrenta una denuncia formal por presunto cohecho e infracción tributaria. La fiscalía busca determinar si estos aportes tuvieron por finalidad interferir en decisiones judiciales, lo que cerraría un círculo de sospechas en torno a la operación de la llamada “muñeca bielorrusa”.

Análisis

Noviembre presenta un panorama mixto en materia de seguridad, donde coexisten avances en la criminalidad convencional, desafíos persistentes en ámbitos escolares y territoriales, tensiones regulatorias en el sector privado de seguridad y la ampliación de un caso de corrupción con impacto institucional. El análisis político-criminal permite observar cómo estos fenómenos no operan aislados, sino que tensionan distintos niveles de la capacidad estatal.

En el ámbito escolar, los incidentes ocurridos en el Instituto Nacional reactivaron la preocupación pública sobre la seguridad en establecimientos emblemáticos. Desde una perspectiva político-criminal, lo relevante no es solo la gravedad del hecho, sino la respuesta institucional que se activa a partir de él. La Contraloría ofició a la Municipalidad de Santiago y a la Superintendencia de Educación para que detallen las medidas adoptadas, lo que muestra que el problema ha trascendido la administración interna del establecimiento. Esto indica una expectativa estatal de mayor coordinación y control preventivo, especialmente en liceos históricamente expuestos a conflictos. El análisis sugiere que la discusión debe centrarse en el diseño de protocolos interinstitucionales, capacidades de monitoreo y políticas específicas para establecimientos de alto riesgo simbólico y mediático.

La implementación de la Ley 21.659 sobre seguridad privada introduce un cambio estructural en la regulación del sector. La elevación de estándares, el rol rector reforzado de la Subsecretaría de Prevención del Delito y medidas como el uso obligatorio de cámaras corporales buscan profesionalizar la actividad y mejorar la rendición de cuentas. No obstante, desde un análisis político-criminal, emergen tensiones relevantes: los plazos de implementación son estrechos y aún no existe claridad sobre cómo se regulará la situación del personal que hoy cumple funciones, pero no cumple con los nuevos requisitos formativos. Ello podría generar brechas operativas temporales, presionar la demanda de formación especializada y exigir una capacidad fiscalizadora estatal más robusta. El desafío radica en equilibrar la mejora normativa con una transición que no afecte la continuidad del servicio ni la estabilidad laboral del sector.

En materia delictual, el informe del Ministerio de Seguridad muestra una reducción sostenida en los delitos de alta connotación pública. La caída de robos violentos, robos con intimidación, delitos contra la propiedad, y también de agresiones y homicidios, sugiere que las estrategias policiales y preventivas están generando efectos positivos. Sin embargo, el aumento de más de 13% en los delitos vinculados a drogas introduce una alerta significativa. Este crecimiento — especialmente en microtráfico y consumo en vía pública— indica que los mercados ilícitos se mantienen dinámicos y con alta presencia territorial. El análisis político-criminal señala que esta área delictual posee lógicas distintas a los delitos tradicionales: requiere inteligencia más fina, intervención comunitaria y articulación institucional para evitar que estos mercados profundicen formas de control informal o generen mayor violencia futura.

Finalmente, los nuevos antecedentes en la “trama bielorrusa” revelan un caso de posible cohecho e influencia indebida que afecta directamente la legitimidad institucional. La ampliación de la investigación hacia parlamentarios y el traslado de parte de la causa a la Fiscalía Regional de Los Lagos muestran que se trata de un fenómeno con ramificaciones políticas y jurídicas. Desde un enfoque político-criminal, este tipo de casos es crítico porque erosiona la confianza en las instituciones responsables de garantizar probidad y gobernanza. Además, instala la necesidad de fortalecer los sistemas de trazabilidad de aportes políticos, mecanismos de control interno y capacidades investigativas para abordar tramas complejas que combinan actores privados, operadores políticos y eventuales compromisos judiciales. El caso presenta una oportunidad única para plantear una reforma en pro de terminar con estos cargos símbolo del sistema patrimonialista pre republicano y pasar a una nueva institucionalidad tanto para los conservadores de bienes raíces como para los notarios públicos y otros cargos delegados de la función estatal. Junto con ello, urge una agenda de probidad que escrutinio mejor las relaciones de las autoridades políticas y donde tal vez sea necesario hacer un examen preventivo de sus cuentas bancarias.

En síntesis, noviembre evidencia un sistema de seguridad que avanza en control delictual convencional, pero enfrenta desafíos estructurales en regulación, gobernanza y criminalidad compleja. Para el lector, la lectura político-criminal sugiere que el foco debe estar en la capacidad estatal para sostener políticas coordinadas, adaptarse a nuevos mercados ilícitos y fortalecer la integridad institucional como condición básica de la seguridad democrática que implica una agenda anticorrupción.

4. Internacional

- **Tensión entre Estados Unidos y Venezuela¹²:** La tensión bilateral se agudizó en noviembre con maniobras militares de ambos lados. El 11 de noviembre, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, anunció el despliegue de 200.000 soldados por todo el territorio para repeler las “amenazas imperiales” atribuidas al reciente despliegue naval y aéreo de EE. UU. en el Caribe. Simultáneamente, Washington reforzó su presencia regional con el portaaviones USS Gerald R. Ford como parte de la operación “Lanza del Sur” –un dispositivo oficial contra el narcotráfico–, lo que las autoridades venezolanas interpretaron como un pretexto para presionar al gobierno de Maduro. Maduro denunció que EE. UU. utiliza la lucha antidrogas para amenazar su gobierno, en un discurso de “máxima alerta” de las fuerzas armadas venezolanas. La escalada incluyó medidas de coerción aérea. El 21 de noviembre la FAA de EE. UU. emitió un aviso (NOTAM) advirtiendo de riesgos en el espacio aéreo venezolano, lo que llevó a varias aerolíneas a suspender vuelos por «extremar la precaución». Caracas respondió revocando permisos a esas compañías extranjeras, argumentando “terrorismo de Estado”, mientras diplomáticos de ambos países intercambiaban notas de protesta.
- **Militarización frontera con Perú¹³:** A fines de noviembre el gobierno de Perú declaró estado de emergencia por 60 días en la región de Tacna (distritos Palca, Tacna y La Yarada–Los Palos), en la frontera con Chile, para frenar el ingreso irregular de migrantes y combatir delitos asociados al tráfico de personas y contrabando. El presidente interino José Jerí ordenó el despliegue de patrullajes militares y policiales permanentes, el cierre y vigilancia armada de pasos no autorizados, uso de drones y la creación de un comando especial para desarticular redes de crimen vinculadas a la migración irregular. Estas medidas autorizan además controles de identidad y operativos de detención en la zona, justificadas oficialmente por la “presión migratoria” y la necesidad de reforzar la seguridad ciudadana.
- **Argentina y pedido de ayuda a Estados Unidos¹⁴:** En noviembre se reportaron conversaciones entre Argentina y EE. UU. para un posible respaldo financiero al gobierno de Javier Milei. Inicialmente se habló de un paquete de asistencia de USD 20.000 millones: un swap de divisas garantizado por el Tesoro de EE. UU. y una línea de crédito igual respaldada por bancos privados. Sin embargo, fuentes citadas por The Wall Street Journal indican que los grandes bancos estadounidenses (JPMorgan Chase, Bank of América y Citigroup) dieron marcha atrás y ahora sólo estarían dispuestos a financiar unos USD 5.000 millones mediante un préstamo de recompra a corto plazo (“repo”), apenas una cuarta parte del monto inicialmente anunciado. Este préstamo reducido serviría sobre todo para que Argentina pueda pagar un vencimiento de deuda cercano de alrededor de USD 4.000 millones.

¹² [Swissinfo, 11 de noviembre del 2025](#); [Infobae, 27 de noviembre del 2025](#).

¹³ [The Associated Press, 29 de noviembre del 2025](#); [El País, 01 de diciembre del 2025](#); [Biobio, 29 de noviembre del 2025](#).

¹⁴ [La Tercera, 21 de noviembre del 2025](#); [Agencia Uruguaya de Noticias, 22 de noviembre del 2025](#).

- **Condenan a prisión a Pedro Castillo**¹⁵: El 27 de noviembre de 2025, la Corte Suprema de Perú sentenció al expresidente Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión. La condena es consecuencia de su fracasado intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022. El tribunal consideró probado que Castillo planeó un golpe de Estado constitucional, aunque al no consumarse las acciones golpistas modificó la calificación del delito a conspiración. Durante el juicio la Fiscalía había solicitado 34 años, pero finalmente se impuso la pena menor que se dicta ahora. El fallo absolvió a Castillo de otros cargos vinculados. La Sala especial lo exoneró de abuso de autoridad y perturbación del orden público, pero le impuso dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además, deberá pagar una indemnización de 12 millones de soles (unos USD 3,5 millones) solidaria con sus coacusados. De esta forma, Castillo permanecerá recluso en la cárcel Barbadillo (destinada a expresidentes) hasta abril de 2034, sin la posibilidad de aspirar a cargos públicos por al menos dos años más, lo que marca un claro capítulo final en su convulso mandato.
- **Ingreso a prisión de Bolsonaro**¹⁶: El expresidente brasileño Jair Bolsonaro comenzó a cumplir el 26 de noviembre su condena de 27 años de cárcel por liderar un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. El juez del Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, confirmó que se habían agotado todas las apelaciones y ordenó que Bolsonaro fuera detenido preventivamente. Con esta decisión, el ultraderechista, siempre polémico, ingresó por primera vez tras las rejas desde que se conoció la sentencia, sorprendiendo a muchos en Brasil que dudaban que llegara a prisión. Hasta ese momento, Bolsonaro cumplía la condena bajo arresto domiciliario. El cambio de estatus ocurrió tras un incidente revelador: cámaras de seguridad captaron al exmandatario intentando romper el monitor electrónico en su tobillo (tobillera). Bolsonaro alegó sufrir “alucinaciones”, pero el juez de Moraes rechazó esa versión en la orden de prisión. Tras ser arrestado el sábado previo, Bolsonaro fue trasladado a una celda de 12 metros cuadrados en la sede de la Policía Federal en Brasilia. Allí permanece incomunicado excepto con sus médicos y abogados, mientras algunos de sus seguidores protestan afuera y otros celebran internamente el cumplimiento de la sentencia.

Análisis

La escalada entre Estados Unidos y Venezuela tensiona el equilibrio hemisférico al reemplazar los mecanismos diplomáticos por dinámicas de disuasión militar, lo que eleva los riesgos de incidentes y presiona a los países sudamericanos a posicionarse ante un conflicto ajeno. Lamentablemente el conflicto amenaza a la Región como zona libre de guerras desde hace 30 años y pone en riesgo la estabilidad de las frágiles democracias y la posibilidad de una coordinación intrarregional más eficaz. Trump ha anunciado que Maduro tiene los días contados, otras fuentes de su entorno señalan que no pasaría la navidad, todo ello ante la presentación de

¹⁵ [La Tercera, 28 de noviembre del 2025](#); [Swissinfo, 27 de noviembre del 2025](#); [BBC, 27 de noviembre del 2025](#).

¹⁶ [DW, 03 de diciembre del 2025](#); [BBC, 22 de noviembre del 2025](#).

una nueva estrategia de seguridad que parece reavivar la vieja doctrina Monroe, pero esta vez en una situación donde Estados Unidos no es una potencia ascendente y su hegemonía se encuentra fuertemente amenazada por China, ante lo cual las políticas pueden ser más erráticas y desesperadas.

América Latina no puede ser considerada zona natural de influencia por ningún poder hegemónico sea americano o foráneo. La única posibilidad para contrarrestar esta tendencia es la coordinación e iniciativa liderada por Brasil y México, en este sentido, se espera que el Presidente Lula logre mediar en la solución pacífica del conflicto con Venezuela y que Maduro entregue el poder a las fuerzas democráticas sin derramamiento de sangre ni costos regionales indeseables.

Por otra parte, para Chile, este conflicto implica prepararse para un posible aumento de flujos migratorios venezolanos y fortalecer su capacidad de respuesta humanitaria en el norte, además de mantener una política exterior que sostenga la autonomía regional y evite quedar atrapada en alineamientos forzados derivados de tensiones bilaterales entre grandes potencias y gobiernos autoritarios. El no alineamiento activo se vuelve un imperativo de nuestra política exterior.

La militarización de la frontera peruana muestra cómo la gestión migratoria se está desplazando hacia un enfoque securitizado que prioriza el control territorial por sobre la protección de derechos. La militarización fronteriza tuvo impactos humanitarios y diplomáticos inmediatos. La presencia reforzada de tropas peruanas dejó varados a decenas de migrantes en la frontera norte chilena –principalmente venezolanos– que no pudieron ingresar a Perú. Ante esta crisis, Chile y Perú activaron canales bilaterales: el 1 de diciembre sus cancilleres acordaron patrullajes conjuntos e intercambio de información de seguridad fronteriza para gestionar los flujos migratorios y mitigar la “crisis humanitaria”. En la práctica, localidades como Chacalluta (Arica) vieron protestas de migrantes bloqueando vías ante la falta de pasos abiertos, lo que requirió diálogo permanente entre ambos gobiernos. Organizaciones de DD.HH. advierten que este enfoque de “securitización” agrava la vulnerabilidad de los migrantes; la estrategia de reforzar la frontera con uso militar aumenta la tensión con Chile y genera debate sobre las responsabilidades compartidas en la gestión migratoria. Pese a que la crisis fue muy acotada, el impacto mediático tuvo efectos multiplicadores, sobre todo, considerando que tanto en Perú como en Chile para la candidatura de Kast, el hecho necesita ser publicitado. Hoy la situación es mucho más normal, pero queda un precedente relevante de militarización fronteriza.

Esta tendencia, aunque busca responder a delitos transfronterizos, genera efectos directos para Chile: mayor presión humanitaria en Arica, congestión de pasos fronterizos y la necesidad de mantener una diplomacia activa para evitar conflictos derivados del uso de fuerzas militares en zonas de alta sensibilidad. Desde una perspectiva progresista, este escenario refuerza la importancia de promover respuestas coordinadas, que no descansen exclusivamente en la fuerza y que consideren las obligaciones humanitarias de ambos Estados. Los problemas migratorios no tienen soluciones unilaterales y se debe fortalecer el diálogo diplomático para soluciones conjuntas, tanto a nivel bilateral como multilateral.

El retroceso del apoyo financiero estadounidense a Argentina evidencia los límites de las estrategias de alineamiento político como herramienta de estabilización económica. Estos vaivenes financieros resaltan la dependencia estructural de Argentina de fuentes externas. La expectativa de un rescate millonario genera presión política interna y optimismo financiero, pero el abrupto recorte al paquete origina incertidumbre. Como señala un informe, el plan de USD 20.000 millones “fue ahora archivado” y los bancos sólo negocian unos USD 5.000 millones para un “repo” de corto plazo. Esto evidencia los límites del nuevo alineamiento estratégico con Washington: aunque la Casa Blanca respaldó públicamente las reformas de Milei, la retirada de los bancos refleja la fragilidad de la confianza internacional y las restricciones a la financiación sin garantías sólidas. Para Chile, este episodio reafirma la necesidad de preservar instituciones fiscales sólidas y marcos regulatorios confiables, pero también de evitar la tentación de depender de soluciones externas rápidas que terminan reproduciendo vulnerabilidades estructurales. La volatilidad argentina tiene efectos inmediatos en el Cono Sur —desde expectativas de mercado hasta confianza inversionista— por lo que un seguimiento estrecho resulta clave para la planificación económica nacional.

La sentencia contra Pedro Castillo confirma la continuidad de la crisis política peruana, donde los conflictos entre poderes se procesan más en tribunales que en espacios de negociación democrática. Esto genera un entorno regional de inestabilidad prolongada, especialmente relevante para Chile dado el impacto directo en la frontera norte y la necesidad de coordinación con un gobierno cuya legitimidad y capacidad de gestión siguen siendo frágiles. La situación peruana subraya la importancia de resguardar instituciones políticas capaces de resolver disputas sin derivar en colapsos frecuentes.

Finalmente, el ingreso de Jair Bolsonaro a prisión demuestra que algunas instituciones latinoamericanas mantienen capacidad para sancionar intentos de ruptura democrática, aunque este avance convive con una polarización profunda que puede irradiar hacia el resto de la región. Para Chile, el caso brasileño es un recordatorio de la necesidad de fortalecer el Estado de derecho y anticipar cómo movimientos de extrema derecha pueden reorganizarse ante sus derrotas judiciales, influyendo en climas políticos locales. En conjunto, estos procesos regionales configuran un entorno complejo que exige a Chile combinar prudencia diplomática, defensa de los derechos humanos y una visión estratégica que priorice la estabilidad democrática y la cooperación regional.